

LA CUOTA DE GÉNERO Y EL AUMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN LA REPRESENTACIÓN POLÍTICA NACIONAL: LA LXII LEGISLATURA FEDERAL (2012-2015)

DRA. ARMINDA BALBUENA CISNEROS*

INTRODUCCIÓN

La lucha por la igualdad política entre hombres y mujeres ha sido lenta y sinuosa. Hoy es el día en el que ni en las democracias más avanzadas se ha alcanzado igualdad plena de participación entre hombres y mujeres en la representación política. A pesar de importantes movimientos sociales, de cambios radicales en las costumbres sociales y de olas de reformas en códigos, leyes y reglamentos, queda mucho por hacer para alcanzar una verdadera democracia representativa e igualitaria.

En México, no fue sino hasta la reforma constitucional de 1953 que se reconoció el derecho de las mujeres a votar y ser votadas, es decir, a gozar de una ciudadanía más plena. Un año más tarde, Aurora Jiménez Quevedo de Palacios resultó la primera diputada federal electa. En 1961, María Cristina Salmorán de Tamayo se convirtió en la primera ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), siendo también la primera mujer en integrar una suprema corte de justicia o un tribunal supremo en el mundo. A pesar de esos avances, no fue sino hasta 1979 cuando una mujer, Griselda Álvarez Ponce de León, ganó la gubernatura de un estado (Colima); por último, hubo que esperar hasta 1984 para que se le otorgara por primera vez a una mujer una patente de notario.¹

Por lo que hace a la instancia de representación por excelencia –el poder legislativo-, la participación política de la mujer también ha sido gradual, tal como

* Coordinadora general del Centro para el Desarrollo Democrático, del Instituto Federal Electoral.

¹ Fue a Olga Sánchez Cordero, quien fue nombrada posteriormente ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cargo que ha ocupado de 1995 a la fecha. Es la novena mujer en desempeñar tal función.

se mostrará en esta ponencia. La primera ley tendiente a la igualdad de género en el Congreso de la Unión data de hace veinte años. Sin embargo, tanto esta ley como sus sucesoras han experimentado diversos problemas en su aplicación; se hizo costumbre que las formalidades de la norma se cumplieran, mientras que la realidad apuntaba en otra dirección. Parte de esa responsabilidad recae en los partidos políticos, que han encontrado, una y otra vez, la manera de evadir el cumplimiento cabal de las cuotas de género. No obstante, ese tipo de prácticas recibió una especie de criterio correctivo por parte de la máxima autoridad en materia electoral, mediante una resolución que significó un parteaguas y un precedente de primer orden para el respeto de las leyes dedicadas a garantizar la igualdad de género.

Se trata de la sentencia SUP-JDC-12624/2011 y sus acumulados emitida el 30 de noviembre de 2011 en la que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió que los partidos políticos están obligados a incluir a personas del mismo sexo como propietario y suplente de las candidaturas a diputados y senadores, esto en relación con los artículos 219 y 220 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe).

El efecto fue notable: la LXII Legislatura (2012-2015) cuenta con el mayor número de mujeres en toda la historia política de México: 184 diputadas (36.8% del total de legisladores) y 43 senadoras (33.6% del total). Esas cifras superan el porcentaje promedio mundial de mujeres en legislaturas o parlamentos nacionales de 20.3%, para la cámara baja (o única) y de 18.2% para las cámaras altas o senados (Inter-Parliamentary Union 2012).

La presente ponencia se propone, entonces, analizar la participación y representación política de las mujeres en México en el ámbito federal, centrando su atención en la LXII Legislatura. La premisa es que, si bien los criterios emitidos por el TEPJF -máxima autoridad jurisdiccional electoral- como la sentencia referida han contribuido a una mayor igualdad, el incremento de la representación política

de la mujer se explica en buena medida por la lucha política y social de diversas mujeres, organizaciones y grupos en pro de la igualdad entre hombres y mujeres, lo cual, a su vez, ha cristalizado en reformas electorales que incluyen acciones de discriminación positiva.

La ponencia se divide en cuatro apartados. El primero contiene los elementos teóricos e históricos en torno al concepto de igualdad, que permiten posicionarlo como un eslabón inquebrantable de las democracias modernas. El segundo apartado expone los puntos de encuentro de la lucha feminista en el contexto mundial, así como los acuerdos internacionales en los que ha derivado la fuerte presión que han ejercido los grupos defensores de los derechos de la mujer. En un tercer apartado se ofrece una descripción de los antecedentes y las etapas por las que atravesó el movimiento feminista en México, para posteriormente enunciar cómo se materializaron, en el ámbito legal, las peticiones de dicho movimiento. Por último, se presentan las consideraciones finales.

I.- Mujeres y democracia: igualdad y acciones afirmativas

La igualdad es un concepto que ha rebasado las definiciones etimológicas para convertirse en uno de los valores supremos que rigen la sociedad moderna. De ser una palabra que alude a la uniformidad y la semejanza, paulatinamente se convirtió en comparsa inseparable de la justicia y en aspiración característica de la democracia actual. Los primeros antecedentes del análisis y defensa de principios igualitarios se han identificado en la antigua Grecia (Martínez Tapia 2000, Aristóteles 1998), pero más allá del campo de la filosofía, el tema de la igualdad cobró verdadera importancia al convertirse en uno de los emblemas de lucha en el derrocamiento del Estado absolutista.

El pensamiento iusnaturalista fue la fuente de donde brotaron las críticas que lograron derribar la justificación divina del poder del monarca. Dicha doctrina se fundamentó en la defensa de un derecho natural, previo al legislado, según el cual

los hombres son libres e iguales por naturaleza; en términos llanos, nadie goza naturalmente de un poder de dominación sobre otro, sino que todos comparten una misma condición, por el mero hecho de ser hombres. En ese contexto, la igualdad se erigió como un límite al ejercicio arbitrario del poder, de manera que no es casual que el artículo 1º de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano –promulgada en 1787– estableciera que “los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derecho”.

Una vez constituida la igualdad como un principio protegido por el Estado, fue preciso crear mecanismos capaces de garantizarla; es así que se impulsaron leyes encaminadas a satisfacer dos dimensiones: la igualdad ante la ley y la igualdad en la ley. La primera supone la inexistencia de diferenciaciones arbitrarias para la aplicación de la ley a un caso concreto. La segunda se presenta como un límite al legislador en el sentido de que el contenido de una ley no puede hacer diferenciaciones arbitrarias ni discriminatorias (Santiago Juárez 2007, pp. 15-16).

Sin embargo, la promoción de los anteriores mecanismos no ha sido suficiente para revertir la desigualdad social, más aun, la evidencia apunta a que ésta es inevitable. Hay que advertir, empero, que la desigualdad no es necesariamente negativa; sólo lo es en la medida en que es injusta. Mario Santiago Juárez (2007, p. 197) lo ha explicado con mayor claridad: el hecho de que existan individuos con más poder que otros, con más dinero o prestigio, no es injusto en sí mismo; lo es cuando esas diferencias sirven como instrumentos de dominación.

En toda sociedad son identificables sectores marginados, discriminados y subordinados por diversas razones, entre las que se cuentan la raza, la religión, las preferencias sexuales y, para el caso que nos interesa, el género de la persona. Históricamente, las mujeres han padecido la discriminación social y sus fatales consecuencias; una de ellas, la imposibilidad para ser miembro activo en la vida pública, al tiempo que sus derechos políticos les eran negados. Baste decir a manera de ejemplo que desde la *polis* griega hasta hace unas pocas décadas, las

mujeres no formaban parte de la ciudadanía, la cual era reservada para el ejercicio de los varones que cumplieran ciertas condiciones.

Como se sabe, la democracia formal pudo implantarse en distintos países, aun cuando las mujeres no tuvieran derecho a votar, ni a ser votadas; sin embargo, la inclusión de legislaciones electorales tendientes a defender los derechos políticos de sectores sociales en desventaja, como las mujeres o las minorías étnicas, es relevante para la democracia en el sentido que propone Michelangelo Bovero (2002, p. 18):

Aquello que distingue a la democracia de las demás formas de convivencia política, en la mayor parte de las versiones que de ésta han sido presentadas, en los tiempos antiguos o en los modernos, es alguna forma de igualdad, o mejor dicho, de parificación, de superación o de absorción de los desniveles.

Aunque la igualdad de género no fue una pieza clave para la construcción de los sistemas democráticos, hoy en día se ha erigido como un elemento estructural sin el cual sería impensable la estabilidad de las instituciones, por lo que es posible decir que la búsqueda de la mejor fórmula para incorporar a las mujeres en la vida política es irreversible.

II. La lucha de las mujeres por la representación política en el mundo

La constitución de la mujer como un actor político no fue una tarea fácil. Los llamados movimientos feministas se gestaron en un escenario lleno de adversidades. Barreras culturales, sociales, religiosas y hasta jurídicas se antepusieron a la lucha por el reconocimiento de los derechos de la mujer.

El antecedente más claro de organizaciones defensoras de la mujer fueron los movimientos sufragistas, que se extendieron en todo el mundo para conquistar el derecho al voto femenino. Empero, la posibilidad de elegir y ser elegidas sólo fue el inicio de varias etapas por las que tuvo que atravesar la lucha femenina. La nueva generación feminista se inició en América Latina en la década de 1970 y adquirió fuerza en la siguiente. Sin embargo, no fue sino hasta la última década del siglo XX cuando la demanda de participación equitativa en lugares de decisión

se convirtió en un punto prioritario del movimiento feminista (Bareiro & Molina 1994).

Dichos movimientos cuestionaron cada una de las razones que justificaban la subordinación femenina y manifestaron una fuerte oposición a la violencia física y psicológica, a la marginación y los abusos que habían sufrido las mujeres. En un inicio repudiaron la condición social de la mujer y posteriormente encaminaron sus esfuerzos para reivindicar la capacidad de autonomía con la que debían contar todos los seres humanos, sin distinción de género (Serret 2008, p 29).

Las feministas elaboraron una crítica al supuesto según el cual la igualdad ante la ley es suficiente para evitar injusticias; antes bien, pusieron en la mesa de discusión la idea de que no es justo tratar igual a los desiguales. Esto quiere decir que las mujeres, como grupo discriminado, requieren de una atención diferente en el ámbito público que tome en cuenta sus condiciones particulares, al tiempo que busque compensar los efectos negativos de la ancestral subordinación.

Bajo esa tesitura se han impulsado las llamadas acciones afirmativas o positivas, que la Comisión Norteamericana de Derechos Civiles define como “cualquier medida, más allá de la simple terminación de una práctica discriminatoria, adoptada para corregir o compensar discriminaciones presentes o pasadas o para impedir que la discriminación se reproduzca en el futuro” (Santiago Juárez 2007).² Originalmente, las acciones afirmativas se concibieron para modificar la situación de desigualdad de los afroamericanos en Estados Unidos; sin embargo, su uso se ha expandido para el beneficio de otros sectores sociales desprotegidos, como las mujeres.

La materialización de las acciones afirmativas en el ámbito político-electoral se ha dado principalmente bajo la forma de cuotas de género, que en términos generales pueden clasificarse en tres tipos (Aparicio Castillo 2011, p. 12):

² Cfr. Comisión Norteamericana de Derechos Civiles Disponible en <http://www.usccr.gov/aaction/aamain.htm> Consultado el 24 de septiembre de 2012.

- a) Las que afectan a los aspirantes o a la lista de precandidatos de algún partido político. Es común encontrarlas en los estatutos internos de los partidos.
- b) Las que afectan la lista definitiva de candidatos. Por lo general se encuentran en los códigos electorales y que son aplicables a todos los partidos políticos por igual.
- c) Las que predeterminan o reservan cierto número de cargos de elección popular para que sólo puedan aspirar a ellos candidatos de un mismo sexo o grupo social particular.

En conjunto, ese tipo de medidas dan cuenta de que en las democracias consolidadas o en vías de consolidación, los movimientos de mujeres han intentado canalizar su activismo y reivindicaciones políticas por las vías institucionales de participación y representación políticas (Hernández Monzoy 2011).

En el plano internacional, los Estados han concretado múltiples acuerdos y tratados internacionales tendientes a garantizar la participación política de las mujeres. La idea subyacente a todos ellos consiste en reconocer que los derechos de la mujer en condiciones de igualdad y libres de toda discriminación tienen la calidad de derechos humanos (Sánchez Cordero 2012), motivo por el cual su protección no sólo interesa a los gobiernos locales, sino también a las jurisdicción internacional.

Es así que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, con sus distintos documentos conformantes, como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención Belém do Pará, han establecido la igualdad ante la ley sin distinción de género, y han condenado la discriminación y la violencia contra la mujer.

Merecen singular atención los acuerdos derivados de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), promulgada en 1979, cuyo artículo primero define a la discriminación contra la mujer como toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.³

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) del Sistema Interamericano ha reconocido la necesidad de establecer ciertas consideraciones sobre la compatibilidad de las medidas de acción afirmativa concebidas para promover la participación política de la mujer con los principios de igualdad y no discriminación. En este mismo sentido, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que monitorea el cumplimiento del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, formuló la Observación General núm. 28 que tiene por objeto la especificación de medidas garantizadoras de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, entre las que destaca el uso de medidas de discriminación inversa (Bareiro 2007, p. 685).

El impacto de este tipo de medidas ha sido diverso. De acuerdo con datos de la Unión Interparlamentaria, para julio de 2012, el porcentaje promedio de mujeres en legislaturas o parlamentos nacionales era de 20.3% para las cámaras bajas o únicas, y de 18.1% para las cámaras altas o senados. Los datos desagregados muestran que los países con el porcentaje promedio más alto de mujeres en el parlamento son los escandinavos con 42%, seguidos por los del continente americano con 22.5%, los europeos (sin países escandinavos) con 21.5%, en cuarto lugar se ubican los del África Subsahariana con 20.3%, en quinto están las

³ Disponible en <http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/0031>
Consultado el 25 de septiembre de 2012.

Inserto en el esquema internacional, México ha impulsado distintas modificaciones a la legislación electoral con el objeto de incorporar activamente a las mujeres en la escena política. Pero esa transformación no sólo obedeció al cumplimiento de las pautas establecidas por los organismos internacionales. La lucha de las mexicanas por adquirir igualdad política tiene orígenes añejos.



III. La lucha de las mujeres por la representación política en México

III.1 Antecedentes

Como en la mayoría de los países, la demanda por el derecho al voto inauguró el listado de exigencias que habría de enarbolar la lucha femenina en México. Desde el porfirismo comenzaron a crearse grupos de mujeres interesadas en la problemática de su tiempo, que se manifestaron en contra de la reelección presidencial y que exigían el establecimiento de principios igualitarios para dirigir el rumbo del país. Tal fue el caso de Hermila Galindo, quien en 1906, se convirtió en una de las primeras mujeres en exponer la necesidad de hacer de la igualdad un principio de relación y de condición para el acceso a los derechos.

Algunos años más tarde (1916), varios grupos se reunieron en el Primer Congreso Feminista, el cual fue auspiciado por el gobernador de Yucatán, Salvador Alvarado. En dicho foro se exigía con firmeza el voto ciudadano de las mujeres. A partir de entonces, en Chiapas, Yucatán y Tabasco se conquistó la igualdad jurídica de las mujeres y el derecho a votar y ser elegidas en puestos públicos de elección popular (Reynoso & D'Angelo 2006, pp. 279-313).

En distintas latitudes del país fue permeando la preocupación de los gobiernos locales por incentivar la participación de la mujer; en ese contexto, es de mencionarse que, tras el Congreso Nacional Feminista en 1923, como consecuencia, el gobernador de San Luis Potosí expidió un decreto en el que se concedía a las mujeres que supieran leer y escribir el derecho a participar en los procesos electorales municipales y estatales. Dicho año, Elvia Carrillo Puerto resultó la primera mexicana electa como diputada en un congreso local (Yucatán) mientras que Rosa Torres se convirtió en la primera presidenta municipal de México, al resultar elegida para gobernar Mérida (Zegada Claire 2012, p. 43).

En el ámbito federal, es relevante mencionar que, desde 1929, se tiene registro de la existencia del Partido Feminista Revolucionario y del Bloque Nacional de

Mujeres dentro del Partido Comunista, que en años posteriores formaron parte del Frente Único Pro Derechos de la Mujer (FUPDM), el cual unificó una serie de demandas no sólo en relación a los derechos políticos, sino también a la igualdad salarial entre mujeres y hombres, por mencionar algunos temas.

Para 1935, más de 800 grupos se encontraban dentro de dicho Frente y, como era de esperarse, una de las principales demandas aglutinadoras era el derecho al voto femenino. En 1938, el Frente se integró al Partido Nacional Revolucionario, en el cual las mujeres votaban y participaban en algunas de las decisiones internas. Ya con el Partido Revolucionario Mexicano, las mujeres crearon la Alianza Nacional Femenina en 1941. Los años previos a la conquista definitiva del derecho al voto de las mujeres estuvieron marcados por la preocupación de que la aprobación del sufragio femenino pudiera amenazar las candidaturas presidenciales. Sin embargo, en contra de todos los temores y prejuicios, el jefe del Ejecutivo, Adolfo Ruiz Cortines, presentó en 1952 la iniciativa constitucional para que las mujeres pudieran votar y ser votadas, misma que sería aprobada el año siguiente (Tuñón Pablos 1992).

Tras la consecución del voto, la lucha feminista amplió su espectro de demandas para generar condiciones equitativas para la mujer; es entonces cuando el impulso de las acciones afirmativas en México comenzó a cobrar sentido. En materia electoral, el primer paso que se dio fue en 1993.

III.2 Cambios legales

En el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) de aquel año se estableció en el artículo 173, fracción III, que los partidos políticos debían promover, en los términos que establecieran sus documentos internos, una mayor participación de las mujeres en la vida política del país, mediante su postulación a cargos de elección popular (Diario Oficial de la Federación 1993). Aunque la disposición quedó limitada al carácter de recomendación, se puede

considerar como el inicio de un largo camino por generar conciencia de la relevancia de abrir espacios a las mujeres en los partidos políticos.

Con la reforma electoral de 1996, se incluyó en el artículo transitorio Vigésimo Segundo del Decreto de reforma del Cofipe la indicación de que los partidos políticos nacionales tenían que considerar en sus estatutos que las candidaturas a diputados y senadores por ambos principios, no excedieran el 70% para un mismo género. Además, promoverían la mayor participación política de la mujer (Diario Oficial de la Federación 1996). Sin duda la medida fue más específica que su predecesora; sin embargo, la falta de distinción entre candidaturas titulares y suplentes, así como la ausencia de un criterio para establecer el orden de la ubicación de candidatos dentro de las listas plurinominales, sesgó los posibles efectos positivos de la reforma, ya que los partidos políticos cumplían con la cuota de género colocando a las mujeres como suplentes en las candidaturas nominales o bien, ubicándolas en los últimos lugares de las listas plurinominales con escasas o nulas posibilidades de llegar al poder.

En atención al vacío anterior, el Cofipe fue reformado de nueva cuenta en 2002 para establecer, por primera vez, una cuota máxima de 70% para candidatos propietarios de un mismo género (artículo 175-A). Asimismo, se establecieron restricciones en el orden de la lista de candidatos plurinominales, de modo que las mujeres tenían que aparecer, como mínimo, en una de cada tres posiciones dentro de las primeras nueve de cada lista. Por último, se estipuló que los partidos políticos podrían ser sancionados con amonestación pública y/o la negativa del registro de las candidaturas además de las ya existentes. Lamentablemente, las cuotas de género no se aplicarían en las candidaturas de mayoría relativa que fueran resultado de un proceso de elección mediante el voto directo, lo que creó una salida para no cumplir cabalmente con las cuotas señaladas (Diario Oficial de la Federación 2002).

Conscientes de la situación anterior, el legislador reformó el Cofipe en 2008; se decidió incrementar de 30 a 40% la cuota mínima de candidatos propietarios de un mismo género. En el mismo tenor se estableció que las listas plurinominales debían incluir al menos dos mujeres en cada segmento de cinco candidatos. Es de mencionarse que las candidaturas de mayoría relativa se mantuvieron exentas de cubrir cuotas de género siempre y cuando fueran resultado de un proceso de elección democrático, conforme a los estatutos de cada partido (Diario Oficial de la Federación 2008).

La efectividad de este nuevo marco legal se vio ensombrecida por la aparición de las denominadas “Juanitas”, que se convirtieron en un nuevo mecanismo para darle la vuelta a la ley y para incumplir las cuotas de género. Así, el 3 de septiembre de 2009, esto es, tres días posteriores al inicio del primer periodo ordinario de sesiones de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, se encontraban en sesión plenaria 396 legisladores de los siete partidos con representación (PAN, PRI, PRD, PT, PVEM, Convergencia y PNA), cuando la mesa directiva informó sobre diez solicitudes de diputados federales que pedían licencia por tiempo indefinido para separarse de su cargo, de las cuales ocho eran de mujeres: cuatro del PVEM, dos del PRI, una del PT y una del PRD. “Fue impactante darse cuenta de que muchas de estas solicitudes de licencia por tiempo indefinido estaban firmadas desde el día de la toma de protesta, el 1º de septiembre. Los escritos parecían machotes a los que sólo había que cambiar el nombre, la firma y el partido”(Corral Jurado 2012, p. 101). En ellos podía leerse lo siguiente:

Por este conducto y con fundamento en el artículo 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito licencia indefinida para separarme de mi cargo como diputada federal, a partir de esta fecha. Por tal motivo, solicito a usted realice todos los trámites conducentes que sobrevienen al presente acto jurídico y se llame a mi suplente (Cámara de Diputados 2009).

Las diputadas Silvia Isabel Monge Villalobos (PAN) y María Hilaria Domínguez Arvizu (PRI) fueron las primeras en manifestar su solidaridad femenina. Las muestras de descontento no se hicieron esperar; la diputada Leticia Quezada del PRD señaló:

Las mujeres del PRD y el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática lamentamos que a menos de 72 horas de haber iniciado funciones, se den 10 solicitudes de licencia. Además, que la mayoría sean mujeres, y que quienes asumen sean hombres. Porque, una vez más, se utiliza a las mujeres para que hombres puedan llegar al poder. Es lamentable.

Deja mal la visión de la Cámara, porque ---repito, a menos de 72 horas--- las mujeres hemos dado la lucha para conquistar espacios. Precisamente estos espacios de conquista para las mujeres, independientemente del partido que sean. No compartimos en lo absoluto... es lamentable.

Nosotros, al interior del PRD, en donde hay una compañera que solicita licencia, vamos a ir este fin de semana al Consejo Nacional para denunciar esta irregularidad. Pero, además, a la Comisión de Garantías, para que al interior de nuestro partido se sancione; porque no lo compartimos. Las mujeres ---repito--- hemos luchado y seguiremos luchando, y denunciaremos, adonde sea, este tipo de comportamiento. Porque tampoco las mujeres deben prestarse a este tipo de situaciones (Cámara de Diputados 2009).

Por su parte, la diputada panista María Elena Pérez de Tejada Romero externó su inconformidad, arguyendo lo siguiente:

Primero que nada, quiero decirles que a explicación no pedida, acusación manifiesta. En ese sentido es una pena que en ese partido, el PRI, hagan lo que la diputada está diciendo en contrario. Creo que las diputadas, así como lo dice, están en su derecho, pero también tienen derecho a ser respetadas. El voto las favoreció, su partido las respaldó, cuentan con la solidaridad de todos nosotros y de todas nosotras, y ellas deberían permanecer aquí (Cámara de Diputados 2009).

El diputado Jaime Cárdenas, del Partido del Trabajo, fue más incisivo para evidenciar el fraude a la ley que se estaba confabulando:

Al igual que las compañeras de distintos partidos políticos y grupos parlamentarios, a mí me parece muy lamentable ---como a ellas--- que principalmente mujeres soliciten licencia para separarse de su cargo de diputadas, a 72 horas de que se haya instalado esta LXI Legislatura.

Lo que más llama la atención es que en ninguna de esas licencias solicitadas por las compañeras diputadas se expresen los motivos, las razones, el porqué solicitan la licencia. Es cierto que están en su derecho, pero sería interesante conocer, sobre todo en el caso de las compañeras diputadas, cuáles fueron los motivos de esas solicitudes de licencia. Me preocupa que ésta sea una vía para vulnerar las cuotas de género que establecen las leyes electorales, tanto del Cofipe como las leyes electorales de los estados.

En realidad estas licencias solicitadas por las compañeras diputadas implican un fraude a la ley, un fraude al Cofipe, un fraude a las leyes electorales. Es una forma de limitar también el derecho de voto y la representación política que obtuvieron de parte de sus electores. Todos estos hechos son graves y constituyen, además, una violación al principio de igualdad previsto en el artículo 1o. de la Constitución. Desde luego votaré en contra de todas estas solicitudes de licencia porque me parece un atropello a las mujeres de esta Cámara y a las mujeres del país (Cámara de Diputados 2009).

En esa misma tesitura hablaron en contra las diputadas y los diputados Mariela Pérez de Tejada, Gustavo González Hernández, Enoé Margarita Uranga Muñoz, Kenia López Rabadán, Teresa del Carmen Incháustegui Romero, Yolanda de la Torre Valdez, María Dina Herrera Soto, Laura Piña Olmedo, Miguel Ángel García Granados, María Antonieta Pérez Reyes, Obdulia Magdalena Torres Abarca, María Teresa Rosaura Ochoa Mejía y José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña.

Después de dichas intervenciones el pleno retiró el punto del orden del día y lo remitió a la Junta de Coordinación Política, “pero los suplentes ya estaban apalabrados, algunos, fieles espadachines de los poderes fácticos. (...) debían retirarse del cargo por licencia o mediante faltas consecutivas injustificadas, pero debían irse” (Corral Jurado 2012, p. 103).

Del Partido Verde Ecologista de México, Katia Garza Romo dejó su espacio a su esposo Guillermo Cueva Sada (sobrino de Ricardo Salinas Pliego); Mariana Ivette Ezeta Salcedo dejó su curul a su hermano Carlos Alberto Ezeta Salcedo (exconsejero de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión); Carolina García Cañón cedió el paso a Alejandro del Mazo Maza (hijo del exgobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo); el suplente de la diputada Laura Elena Ledesma Romo desertó, y su lugar le fue asignado al siguiente ciudadano de la lista plurinominal, Eduardo Ledesma Romo (su hermano).

Del Partido Revolucionario Institucional, Yulma Rocha Aguilar cedió su espacio a Guillermo Raúl Ruíz de Teresa y Ana María Rojas Ruiz entregó su curul a Julián Nazar Morales.⁴ Del Partido del Trabajo Anel Patricia Nava Pérez dejó su lugar a

⁴ En el PRI, posteriormente Fuensanta Patricia Jiménez Case cedió su espacio a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre; Sara Gabriela Montiel Solís entregó su curul a Enrique Salomón Rosas Ramírez; Hilda Esthela Flores Escalera dejó su espacio a Noé Fernando Garza Flores, y Angélica del Rosario Araujo Lara cedió su lugar a Efraín Ernesto Aguilar Góngora.

Alfonso Primitivo Ríos Vázquez. En el Partido de la Revolución Democrática, Marcos Carlos Cruz Martínez accedió a la diputación que dejó María Guadalupe Silerio Núñez.

A este pasaje lamentable de la historia política en México se le conoció como las *Juanitas*. El término de *Juanitas* surgió en 2009, a raíz de que Rafael Acosta, apodado Juanito, fuera postulado como candidato a Jefe Delegacional en Iztapalapa, pero al que Andrés Manuel López Obrador condicionó a renunciar si resultaba ganador para dejar su espacio a Clara Brugada.

El tema de las *Juanitas* es un hecho inadmisible en una democracia consolidada, pues constituye a todas luces un fraude a la ley al violentar el espíritu de la misma, al tiempo que se humilló a la mujer por disponer de ella según el capricho.

En vísperas de la elección de 2012, el Consejo General del Instituto Federal Electoral aprobó los criterios aplicables para el registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular que presentaran los partidos políticos y, en su caso, las coaliciones, ante los consejos del Instituto. Se trata del acuerdo CG327/2011, cuyo resolutivo décimo tercero establecía que de la totalidad de solicitudes de registro de candidaturas a diputados y senadores, tanto de mayoría relativa como de representación proporcional, que presentaran los partidos políticos o coaliciones ante el IFE, en ningún caso incluirían más del sesenta por ciento de candidatos propietarios de un mismo género. Además, se verificaría que los partidos políticos hubieran observado los porcentajes de género establecidos en sus propios estatutos.⁵

Aunque se mantuvo la excepción de cumplir con la regla de género a las candidaturas de mayoría relativa que fueran elegidas mediante procedimientos democráticos, se estableció que en caso de que el partido político no eligiera a sus candidatos mediante dicho proceso, debía presentar como máximo 180 y 38

⁵ Disponible en <http://www.ife.org.mx/docs/IFE-v2/DS/DS-CG/DS-SesionesCG/CG-acuerdos/2011/octubre/CGex201110-07/CGe71011ap9.pdf> Consultado el 27 de septiembre de 2012.

candidatos propietarios de un mismo género a diputados y senadores, respectivamente, o en forma proporcional, dependiendo del número de candidatos electos por dicho proceso, procurando que la fórmula completa se integrara por candidatos del mismo género.

El acuerdo referido fue explícito al indicar qué debe entenderse por procedimiento democrático y determinó que las listas de representación proporcional se integraran por segmentos de cinco candidaturas. En cada uno de los segmentos habría dos candidaturas de género distinto, de manera alternada, procurando que la fórmula completa se integrara por candidatos del mismo género. Tratándose de la lista de candidatos a senadores, el acuerdo especificó que los dos últimos lugares fueran ocupados por un candidato de cada género.

En suma, este acuerdo se convirtió en la punta de lanza de una serie de impugnaciones y resoluciones que finalmente llevaron al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a emitir una de las más importantes sentencias en lo que a igualdad de género se refiere, identificada con el expediente SUP-JDC-12624/2011 y acumulados. Las disposiciones más importantes de dicha sentencia fueron las siguientes:

- Que es obligación de los partidos políticos la igualdad de oportunidades y la equidad entre hombres y mujeres para tener acceso a los cargos de elección popular;
- Que es obligación de los partidos políticos garantizar la equidad y procurar la paridad de los géneros en las candidaturas a cargos de elección popular;
- Que los partidos políticos deben promover y garantizar la igualdad de oportunidades y procurar la paridad de género en la vida política del país a través de postulaciones a cargos de elección popular en el Congreso de la Unión tanto de mayoría relativa como de representación proporcional;
- Que de la totalidad de las solicitudes de registro tanto de diputados como de senadores que representan los partidos políticos o coaliciones ante el Instituto, deberán integrarse con al menos el cuarenta por ciento de candidatos propietarios de un mismo género, procurando llegar a la paridad;

- Que en caso de que un partido político o coalición no cumpla con lo establecido en los artículos 219 y 220 del mencionado Código, el Consejo General del Instituto debe realizar hasta dos requerimientos para que rectifique las solicitudes de registro de candidaturas y en caso de no hacerlo, sancionar con la negativa del registro de las candidaturas correspondientes;
- Que los partidos políticos deberán presentar como mínimo 120 y 26 candidatos propietarios de un mismo género, a diputados y senadores, respectivamente en términos de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 219 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, invariablemente deberá cumplir con el número mínimo de candidaturas señaladas (Centro para el Desarrollo Democrático 2012).

Los lineamientos expresados por el tribunal significaron un parteaguas para el establecimiento de las bases de un marco jurídico capaz de hacer valer las cuotas de género en México; esto sin menoscabar el hecho de que previo a la sentencia del tribunal, ya era observable una tendencia que favorecía a las mujeres para obtener cargos de elección popular. Los datos muestran que gracias al empuje de los movimientos sociales feministas, de los acuerdos internacionales y de la toma de conciencia de los partidos políticos y autoridades electorales, la presencia femenina en el Congreso vivía un notable aumento. Para tener una panorámica de un antes y un después, de la participación política de las mujeres en nuestro país, basta decir que mientras en la XLII legislatura sólo había una mujer diputada, para la LXI ya se encontraban 168. Asimismo, las legislaturas XLVI y XLVII sólo contaron con 3 senadoras, pero en la legislatura LXI ya había 28 (véanse cuadros I y II).

Las cifras anteriores reflejan buena parte de las victorias obtenidas por la incansable lucha feminista que, concatenada con el reconocimiento jurídico e institucional, ha creado el marco proclive para alcanzar el más alto porcentaje de mujeres en el Congreso de la Unión para la LXII Legislatura (2012-2015). Como se puede observar en los cuadros III y IV, la Cámara de Diputados cuenta con un 36.8 % de mujeres (184) y la Cámara de Senadores con un 33.6% (43

senadoras).⁶ Este hecho sin precedentes no sólo abona al proceso de consolidación democrática del país, sino que posiciona a México como uno de los países con los índices más altos de participación política femenina en el mundo.⁷

III.3 Cambios institucionales y sociales

Además de los cambios legales descritos, otras instituciones y organizaciones civiles han contribuido a la igualdad entre hombres y mujeres. Para referir aquellas que conocemos mejor, a continuación enunciaremos las acciones que el Instituto Federal Electoral ha llevado a cabo para promover, en el ámbito de su competencia, un trato más equitativo entre hombres y mujeres. La relación no es taxativa, aquí se mencionan las acciones más importantes.

En materia de aplicación de la cuota de género, desde las elecciones de 1994 se han incluido como un requisito en el registro de candidaturas en los cargos de elección popular. Por lo que hace integración de los consejos distritales el IFE introdujo el principio de paridad para aprobar la designación de consejeras y consejeros como una medida para integrar a las mujeres en los asuntos públicos.⁸

⁶ Con ello, México cumple con uno de los objetivos de la meta G de la *Plataforma para la Acción de Beijing* de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer: “adoptar medidas, incluso, cuando proceda, en los sistemas electorales, que alienten a los partidos políticos a integrar a las mujeres en los cargos públicos electivos y no electivos en la misma proporción y en las mismas categorías que los hombres”. También se cumple con uno de los indicadores de la meta 3 de los *Objetivos del Milenio* propuestos por la ONU: “la proporción de escaños ocupados por mujeres en los parlamentos nacionales”.

⁷ De acuerdo con ONU Mujeres, en enero de 2012 México se encontraba en el lugar número 31 en el rango de países que tienen entre 25 y 29.9% de participación femenina en la cámara baja (junto a Suiza, Austria, Trinidad y Tobago, Etiopía, Portugal, Luxemburgo, Bolivia, Afganistán, Sudán del Sur, Iraq y la República Democrática Popular Lao). Ahora, tras las elecciones más recientes, México se ubicaría en el lugar número 17, empatado con Argentina y al lado de naciones como Islandia, Noruega, Dinamarca, España, Bélgica, Mozambique, Costa Rica, Angola, Uganda y República de Tanzania, en el rango de quienes cuentan con un porcentaje de mujeres en la cámara baja de entre 35 y 39.9%. Véase mapa: Mujeres en la política 2012, disponible en http://genero.ife.org.mx/docs/mapa_UNU_Mujeres2012.pdf. Consultado el 28 de septiembre de 2012.

⁸ Para los procesos electorales de 2008-2009 y 2011-2012 el porcentaje de consejeras propietarias fue de 47.14 y 49.8%, respectivamente.

En el ámbito de la capacitación, formación e impulso del liderazgo de las mujeres, el IFE regula la etiquetación del gasto ordinario con un 2% para la capacitación, formación e impulso del liderazgo femenino (artículo 78 del Cofipe).⁹ Asimismo, en junio de 2011 el Consejo General aprobó el Reglamento de Fiscalización a las Prerrogativas de los Partidos Políticos, el cual contiene definiciones puntuales sobre la igualdad de género y sugiere temas, tareas y acciones concretas para que los partidos políticos puedan ocupar el recurso, presentar un programa anual y atender la capacitación, formación e impulso del liderazgo femenino. En las reglas aprobadas, se describe con detalle cómo es que los partidos deberán informar sobre dichos gastos, de modo que autoridades y ciudadanía cuenten con herramientas para el seguimiento de este recurso.

En esa misma tesitura, a partir del proceso electoral 2008-2009 el IFE habilitó el micrositio *Género y Democracia*, en el cual se puede encontrar información relevante sobre eventos, publicaciones y acciones sobre el tema en diversos espacios.¹⁰ Asimismo, el IFE ha procurado una imagen “valiosa” del trabajo de las mujeres en el espacio público en los promocionales del Instituto para divulgar la relación del voto y para difundir la necesidad de la participación ciudadana el día de la jornada, destacando el titulado “*El lugar de la mujer*” que obtuvo un reconocimiento del INMUJERES en 2010. De igual forma, el IFE ha desplegado una estrategia informativa sobre los derechos políticos de las mujeres a militantes de los partidos políticos así como a mujeres en comunidades indígenas de diversos puntos del país.

En cuanto a convenios de colaboración, en 2009 el Instituto firmó con el INMUJERES un convenio a fin de fortalecer el impulso de las mujeres en el diseño y seguimiento de tareas que comprometen la transversalidad de género en las funciones del IFE. Éste ha traído como resultado el esfuerzo interinstitucional para compartir información, el desarrollo de investigaciones y la adecuada coordinación

⁹ Para mayor información puede consultarse la sección “El género en los partidos” en el micrositio *Género y Democracia* del IFE: <http://genero.ife.org.mx/partidos.html>

¹⁰ La dirección electrónica del micrositio es: <http://genero.ife.org.mx/index.html>

con organizaciones de la sociedad civil en eventos y programas. En esa misma línea, se han efectuado trabajos y acuerdos con organizaciones de la sociedad civil para intervenir en la educación cívica y el uso de los modelos pedagógicos para la equidad. Así también, el IFE convoca a concursos específicos para hacer intervenciones con la población en el sentido de fomentar la cultura democrática, el fomento al diálogo y el acuerdo como formas para resolver conflictos y el desarrollo de la capacidad de agencia de la ciudadanía. En ambos sentidos, el IFE mantiene una definición hacia la transversalidad de género de la educación cívica. Por ejemplo, este año se convocó al primer concurso nacional de organizaciones para el liderazgo político de las mujeres (2012–2013).

Finalmente, es importante destacar el *Código de ética de los funcionarios del IFE*, así como el Programa contra la Discriminación y a favor de la Equidad implementado por el IFE desde 2009. El primero sirve como base para el fomento a la solidaridad, el desempeño corresponsable y en consonancia al fomento de la equidad de género; mientras que el segundo tiene como objetivo la problemática sobre desigualdad de género, centrándose en la evaluación periódica de salarios, de modo que empleadas y empleados con las mismas responsabilidades tengan el mismo salario. Existe una campaña sobre clima laboral en los módulos de atención ciudadana con énfasis en la perspectiva de género y, todos los funcionarios cuentan con el buzón de quejas y denuncias en materia de discriminación, inequidad laboral o acoso laboral.

IV. Consideraciones finales

La inédita presencia femenina en el Congreso de la Unión, no sería comprensible sin los esfuerzos de los movimientos sociales defensores de la igualdad de género. Las mujeres organizadas han demostrado que su naturaleza no es apolítica, sino que un conjunto complejo de factores culturales, sociales, religiosos, entre otros, colocaron a la mujer en una situación de desventaja y subordinación con respecto a los varones.

Como se explicó con anterioridad, el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres atravesó por distintas etapas. Tanto en el plano internacional como en el nacional, inauguraron la escena pública los llamados movimientos sufragistas, que lograron el derecho al voto femenino. Pero esa no sería más que la primera batalla que tendrían que vencer los grupos feministas, ya que la condición social de la mujer exigía el cumplimiento de metas mayores.

Las feministas elaboraron una agenda que contiene un amplio abanico de temas concernientes a la mujer; sin embargo, no es exagerado decir que la obtención de derechos políticos fue y sigue siendo un elemento central en la lucha por reivindicar su papel.

El recorrido por la legislación electoral mexicana muestra intentos a veces tímidos, pero en los últimos años más decididos, por promover la inclusión de las mujeres en la representación política. Lamentablemente, en sus inicios dicha legislación dio un margen de maniobra a los partidos políticos que les permitía eludir el espíritu de la ley. Aunque formalmente se incluían a mujeres en las candidaturas y en las listas plurinominales, éstas no conseguían ocupar curules debido a que eran registradas como suplentes o bien eran colocadas en los últimos lugares de las listas plurinominales.

Lo anterior no es más que un ejemplo de los retos que ha encontrado a su paso la representación política femenina, así como también da cuenta de que en nuestros días persiste la resistencia de los partidos políticos, y en general de la sociedad, para incorporar sin reservas a las mujeres en los cuerpos políticos. Esto parece sugerir que los cambios en las instituciones van a una velocidad mayor que los cambios de la percepción sobre la presencia de las mujeres en estos órganos (Peschard 1998).

La situación descrita manifiesta que los grupos feministas han logrado llevar al ámbito legal sus peticiones, sin embargo, las acciones afirmativas como las cuotas de género, no han resuelto el problema de fondo de la discriminación a la mujer. Muchos temas están pendientes para arribar al ideal de igualdad o si se prefiere, igualdad de género entre hombres y mujeres. Aunque vale la pena indicar que el cumplimiento efectivo de las cuotas de género es un estupendo intento.

CUADRO I

Distribución de Diputadas y Diputados Federales por Legislatura, 1952 – 2015 ¹¹						
Legislatura	Período	Total	Hombres	Mujeres	%	
					Hombres	Mujeres
XLII	1952 a 1955	162	161	1	99.4	0.6
XLIII	1955 a 1958	160	156	4	97.5	2.5
XLIV	1958 a 1961	162	154	8	95.1	4.9
XLV	1961 a 1964	185	176	9	95.1	4.9
XLVI	1964 a 1967	210	197	13	93.8	6.2
XLVII	1967 a 1970	210	198	12	94.3	5.7
XLVIII	1970 a 1973	197	184	13	93.4	6.6
XLIX	1973 a 1976	231	212	19	91.8	8.2
L	1976 a 1979	236	215	21	91.1	8.9
LI	1979 a 1982	400	368	32	92.0	8.0
LII	1982 a 1985	400	358	42	89.5	10.5
LIII	1985 a 1988	400	358	42	89.5	10.5
LIV	1988 a 1991	500	442	58	88.4	11.6
LV	1991 a 1994	499	455	44	91.2	8.8
LVI	1994 a 1997	496	424	72	85.5	14.5
LVII	1997 a 2000	500	413	87	82.6	17.4
LVIII	2000 a 2003	500	416	84	83.2	16.8
LIX	2003 a 2006	498	374	124	75.1	24.9
LX	2006 a 2009	500	384	116	76.8	23.2
LXI	2009 a 2012	500	332	168	66.4	33.6
LXII	2012 a 2015	500	316	184	63.2	36.8

¹¹ Fuente: CEAMEG-Cámara de Diputados, disponible en http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/ceameg/participacion_politica/sipp3_2/indice.htm | Consultado el 27 de septiembre de 2012.

CUADRO II

Distribución de Senadoras y Senadores por Legislatura, 1964 – 2015 ¹²						
Legislatura	Periodo	Total	Hombres	Mujeres	%	
					Hombres	Mujeres
	1964 a 1970	58	55	3	94.8	5.2
XLVIII y XLIX	1970 a 1976	60	54	6	90.0	10.0
L y LI	1976 a 1982	64	56	8	87.5	12.5
LII y LIII	1982 a 1988	64	44	20	68.8	31.3
LIV	1988 a 1991	64	54	10	84.4	15.6
LV	1991 a 1994	64	62	2	96.9	3.1
LVI	1994 a 1997	128	115	13	89.8	10.2
LVII	1997 a 2000	128	108	20	84.4	15.6
LVIII	2000 a 2003	128	105	23	82.0	18.0
LIX ^{a/}	2003 a 2006	127	96	31	75.6	24.4
LX	2006 a 2009	128	104	24	81.2	18.8
LXI ^{a/}	2009 a 2012	124	96	28	77.4	22.6
LXII	2012 a 2015	128	43	85	66.4	33.6

Nota: ^{a/} No se efectuaron elecciones para senadores.

¹² Fuente: CEAMEG-Cámara de Diputados. Disponible en: http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/ceameg/participacion_politica/sipp3_2/indice.htm
| Consultado el 27 de septiembre de 2012.

CUADRO III

LXII LEGISLATURA (2012-2015) DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS: INTEGRACIÓN POR GÉNERO Y GRUPO PARLAMENTARIO¹³

Grupo parlamentario	Hombres	%	Mujeres	%	Total	%
PRI	132	62.3	80	37.7	212	100
PAN	78	68.4	36	31.6	114	100
PRD	65	62.5	39	37.5	104	100
PVEM	17	58.6	12	41.4	29	100
MC	10	62.5	6	37.5	16	100
PT	9	60	6	40	15	100
NA	5	50	5	50	10	100
TOTAL	316	63.2	184	36.8	500	100

CUADRO IV

LXII LEGISLATURA (2012-2015) DE LA CÁMARA DE SENADORES: INTEGRACIÓN POR GÉNERO Y GRUPO PARLAMENTARIO¹⁴

Grupo parlamentario	Hombres	%	Mujeres	%	Total	%
PRI	34	65.4	18	34.6	52	100
PAN	26	68.4	12	31.6	38	100
PRD	16	72.7	6	27.3	22	100
PVEM	6	66.7	3	33.3	9	100
PT	3	60	2	40	5	100
SIN GRUPO	0	0	2	100	2	100
TOTAL	85	66.4	43	33.6	128	100

¹³ Fuente: Cámara de Diputados. Disponible en http://sitl.diputados.gob.mx/LXII_leg/cuadro_genero.php Consultado el 27 de septiembre de 2012.

¹⁴ Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Cámara de Senadores. Disponible en <http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=9&sm=2&str=T> Consultado el 27 de septiembre de 2012.

Evolución normativa de la cuota de género en México			
Año	Legislación/Sentencia	Disposición normativa relacionada	Cuota de género
2011	SUP-JDC-12624/2011	El TEPJF estableció que en el caso de las candidaturas que conforman la cuota de género prevista en el artículo 219, párrafo primero del COFIPE, la fórmula completa (propietario y suplente) debe integrarse por candidatos del mismo género.	40%---60% de candidatos propietarios y suplentes de un mismo género

		<p>De la totalidad de solicitudes de registro, tanto de las candidaturas a diputados como de senadores que presenten los partidos políticos o las coaliciones ante el Instituto Federal Electoral, en ningún caso incluirán más del setenta por ciento de candidatos propietarios de un mismo género.</p> <p>ARTÍCULO 175-B</p> <p>1. Las listas de representación proporcional se integrarán por segmentos de tres candidaturas. En cada uno de los tres primeros segmentos de cada lista habrá una candidatura de género distinto. Lo anterior sin perjuicio de los mayores avances que en esta materia señale la normatividad interna y los procedimientos de cada partido político.</p>	
1996	DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales;	<p>TRANSITORIO</p> <p>Vigésimo Segundo.- Los partidos políticos nacionales considerarán en sus estatutos que las candidaturas por ambos principios a diputados y senadores, no excedan del 70% para un mismo género. Asimismo promoverán la mayor participación política de las mujeres.</p>	30%--- 70% de candidatos de un mismo género
1990	Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales	<p>ARTÍCULO 175</p> <p>..</p> <p>2. Las candidaturas a diputados a elegirse por el principio de mayoría relativa y por el principio de representación proporcional, así como las de senadores, se registrarán por fórmulas de candidatos compuestas cada una por un propietario y un suplente.</p>	No se establecía cuota de género.
1986	Código Federal Electoral	<p>ARTÍCULO 216</p> <p>Las candidaturas a diputados por mayoría relativa y por representación proporcional y las de senadores, serán registradas por fórmulas de candidatos compuestas cada una por un candidato propietario y candidato suplente.</p>	No se establecía cuota de género.
1977	Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales	<p>ARTÍCULO 93</p> <p>Las solicitudes de registro de candidatos a diputados federales, por mayoría relativa o por el principio de representación proporcional, se presentarán suscritas por los titulares de los órganos directivos de los partidos políticos, facultados para ello por sus estatutos.</p> <p>ARTÍCULO 94</p> <p>Las solicitudes de registro de candidatos a senadores se presentarán directamente ante la Comisión Local Electoral correspondiente o supletoriamente ante la Comisión Federal Electoral, suscritas por los titulares de los órganos directivos de los partidos políticos, facultados para ello por sus estatutos.</p>	No se establecía cuota de género.

BIBLIOGRAFÍA

- Aparicio Castillo, Francisco Javier (2011), *Cuotas de género en México. Candidaturas y resultados electorales para diputados federales 2009*, México, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
- Aristóteles (1998), *La Política*, introducción, traducción y notas de Carlos García Gual y Aurelio Pérez Jiménez, Madrid, Alianza, 1998.
- Bareiro Line (2007), "Representación política de las mujeres," en Dieter Nohlen, *et al.*, (comps.), *Tratado de Derecho Electoral comparado en América Latina*, México, Instituto Interamericano de Derechos Humanos/Universidad de Heidelberg/International IDEA/Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación/Instituto Federal Electoral/Fondo de Cultura Económica.
- Bareiro, L. & N. Molina (1994), *Igualdad, democracia y ciudadanía: Preinforme*, Coordinación Regional de ONG de América Latina y el Caribe, Mar del Plata.
- Bovero, Michelangelo (2002), *Una gramática de la democracia. Contra el gobierno de los peores*, trad. de Lorenzo Córdova Vianello, Madrid, Trotta.
- Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (2009), "Diputados que piden licencia", *Diario de Debates*, año 1, sesión 3, jueves 3 de septiembre de 2009.
- Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género de la Cámara de Diputados (2012), http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/ceameg/participacion_politica/sipp3_2/indice.html
- Centro para el Desarrollo Democrático del IFE (2012), "Ruta crítica de la cuota de género a nivel Federal. Evolución jurisdiccional".
- Comisión Norteamericana de Derechos Civiles (2012), <http://www.usccr.gov/aaction/aamain.htm>
- Corral Jurado, Javier (2012), "Juanas, Gaviotas, Eufrosinas y sin nombre. Una visión personal de la situación de las mujeres en México" en AA.VV., *Ellas... por ellos*, México, Conapred.

- Diario Oficial de la Federación (1993), “Decreto por el que se reforma y adiciona el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales”, 24 de septiembre de 1993.
- Diario Oficial de la Federación (1996), “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales”, 22 de noviembre de 1996.
- Diario Oficial de la Federación (2002), “Decreto por el que se expide el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales”, 24 de junio de 2002.
- Diario Oficial de la Federación (2008), “Decreto por el que se expide el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales”, 14 de enero de 2008.
- Esperanza Tuñón Pablos (1992), *Mujeres que se organizan. Frente único pro derechos de la mujer*, México, UNAM, Miguel Ángel Porrúa.
- Hernández Monzoy, Andira (2011), *Equidad de género y democracia interna de los partidos políticos. Políticas partidistas para la inclusión política de las mujeres en América Latina*, TEPJF.
- Instituto Federal Electoral (2011), Acuerdo CG327/2011, México, 7 de octubre de 2011.
- Inter-Parliamentary Union (2012), <http://www.ipu.org/wmn-e/world.htm>
- Martínez Tapia, Ramón (2000), *Igualdad y razonabilidad en la justicia constitucional española*, Almería, Universidad de Almería, Servicio de Publicaciones.
- Peschard, Jacqueline (1998) “La participación política de las mujeres en los órganos electorales”, ponencia presentada en el Taller Sectorial sobre Estadísticas e Indicadores de Participación Política. Toma de decisiones y género, bajo los auspicios del Pronam y Unifem, México.
- Reynoso, Diego y Natalia D’Angelo (2006), “Ley de cuota y su impacto en la elección de mujeres en México”, *Política y Gobierno*, vol. XIII, Núm. 2.
- Sánchez Cordero, Olga (2012), “Equidad de género en materia electoral. Pronunciamientos de la Suprema Corte de justicia de la Nación” en AA.VV.,

Género y Democracia, México, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.

Santiago Juárez, Mario (2007), *Igualdad y Acciones Afirmativas*, México, Universidad Nacional Autónoma de México/Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.

Serret, Estela (2008), *Discriminación de género. Las inconsecuencias de la democracia*, México, Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (2011), Sentencia SUP-JDC-12624/2011 y acumulados, 30 de noviembre de 2011.

Zegada Claire, María Teresa (2012) *Indígenas y mujeres en la democracia electoral: análisis comparado*, México, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.